

NÚMERO 45

CÁMARA DE SENADORES

42^A. SESION ORDINARIA DEL 20 DE AGOSTO DE 1857

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GUIDO

Orden del día: Continuacion del debate sobre el proyecto de ley que organiza los Tribunales Federales desde el artículo 17 hasta el 26 (Con asistencia del señor Ministro del Culto é Instruccion Pública)—

Asuntos entrados: Tres notas del Excmo. señor Presidente de la Confederacion fecha 19 del corriente, comunicando por las dos primeras el recibo y sancion por su parte en ese día de las leyes que fundan una clase de dibujo en la Universidad de San Carlos y otra de música en el Colegio de Monserrat, y por la última el del decreto del Senado aprobatorio del nombramiento de Juez de la Suprema Corte hecho por el Poder Ejecutivo en la persona del doctor don Manuel Lucero.

Ferré
Figueroa
Leiva
Dolgado
Blías
Alvarado
Crosco
Zapata
Godoy
Díaz-Velez
Arias (Fernando)
Acovedo
Nuñez
Echagüe
Arias (Tomás)
Bustamante
Zavalía

AUSENTE
por indisposicion

Gonzalez
Vidal
Saravia

Con licencia

Pedernera
Paz

En la Ciudad del Paraná, Capital provisoria de la Confederacion Argentina, á los veinte dias del mes de Agosto del año del Señor de mil ochocientos cincuenta y siete, reunidos en su Sala de Sesiones, el señor Presidente Provisorio del Senado y demás señores Senadores inscritos al margen, con inasistencia de los señores Gonzalez, Vidal y Saravia por indisposicion, y ausentes los señores Pedernera y Paz fuera de la Capital, con licencia, se declaró

abierta la sesion concurriendo á ella el Excmo. señor Ministro de Justicia.

No estando dispuesta ninguna de las actas de las dos anteriores sesiones, se pasó á dar cuenta de los asuntos entrados en Secretaria y se dió lectura de ellos, siendo tres notas del Excmo. señor Presidente de la Confederacion, fecha diecinueve del corriente, comunicando por las dos primeras el recibo y sancion por su

parte en ese día, de las leyes que fundan una clase de dibujo en la Universidad de San Carlos, y otra de música en el Colegio de Monserrat; y por la última el de el Decreto del Senado aprobatorio del nombramiento de Juez de la Suprema Corte hecho por el Poder Ejecutivo en la persona del Dr. D. Manuel Lucero. El señor Presidente las destinó al archivo.

Pasóse despues de esto, á la consideracion de la órden del día, poniendo el señor Presidente en discusion el artículo 17 del Proyecto, que habia quedado pendiente en la sesion anterior.

El señor Zapata —Como miembro informante de la Comision expuso: que en conformidad á las observaciones hechas á este artículo en discusion anterior, por algunos señores Senadores, y que la Comision habia aceptado, habia convenido en proponerlo en la siguiente forma:

“Artículo 17—Corresponde á la misma Corte Suprema la decision de todas las competencias que se susciten con su propia jurisdiccion, ó entre las Córtes de Distrito, ó entre estas

con las justicias superiores ó autoridades de Provincias, y entre las justicias de diferentes Provincias”.

Puesto el artículo en discusion en esa forma:

El señor Arias (D. Fernando): que sin observar el artículo, se proponia hacer notar á la Comision dos vacios que encontraba por cuanto con este artículo terminaba en el Proyecto el período ó seccion de las atribuciones de la Corte Suprema. Que el primero era que ni por este ni por ninguno de los otros del Proyecto, se preveia, ó fijaba el Tribunal que debiese conocer de los conflictos entre los poderes públicos de diferentes Provincias, y que le parecia conveniente, que puesto que sin embargo de que la Constitucion, no preveia el caso de competencia entre las justicias de diferentes provincias, y no obstante por el proyecto se atribuía á la Suprema Corte la decision de ellas se le atribuye tambien el conocer en esos conflictos, aunque la Constitucion no le diese esa facultad. Que el segundo vacio que encontraba era, que no se señalaba tampoco el tribunal que debiese conocer de los juicios de responsabilidad, tanto de los miembros de la Corte Suprema, cuanto de los jueces de las Cortes de Distritos, salvo el caso que, en la atribucion que se le dá, de conocer en las causas referentes á la conducta ministerial de sus miembros, y de los jueces de Distrito, esté comprendida la de conocer en los juicios de responsabilidad, es decir, no solo de las causas que se originasen por las fallas personales de conducta, sino tambien de las infracciones de ley. Que desearia oir á este respecto al señor miembro informante.

El señor Zapata—Que por el artículo en discusion, se trataba solo de las competencias de jurisdiccion que pudieran suscitarse entre los diferentes tribunales en que se organiza la justicia federal entre estos y los de provincias, y entre los superiores de diferentes provincias. Que el señor Senador extrañaba no ver comprendido en este artículo, un caso que decia haber sido omitido por la Constitucion, cual era el de los conflictos entre los Poderes Públicos de diferentes provincias; pero que ese caso estaba previsto por la Constitucion en su artículo 106, y tambien por la ley. Que aquel artículo decia: “Ninguna provincia puede de-

clarar ni hacer la guerra á otra provincia: sus quejas deben ser sometidas á la Corte Suprema y dirimidas por ella etc”. Que por consiguiente, el caso indicado por el señor Senador era de los que estaban atribuidos á la Corte Suprema originaria y exclusivamente, por que es de aquellos en que una provincia es parte, pues que seria parte la provincia desde que estuviese comprometido uno de sus Poderes Públicos. Que respecto á la segunda observacion del señor Senador; la Comision comprendia que cuando el artículo 16 del proyecto dice: que, “la Corte Suprema conoce de las causas referentes á la conducta ministerial de sus miembros y de los de las Cortes de Distrito, se referian tambien á las infracciones de Ley que pudieran cometer estos.

El señor Arias (Fernando)—Que habia principiado por anunciar que no observaba el artículo, y que solo, teniendo en cuenta, que con él terminaba la seccion de las atribuciones de la Corte Suprema, indicaba, que podia dársele tambien, bien por ese artículo ó por otro, la de conocer de los conflictos entre Poderes Públicos de diferentes Provincias. Que no creia que este caso estuviese previsto por el artículo 106 de la Constitucion, como lo espresaba el señor Senador preopinante, ni menos en la ley en discusion; por que no era muy explícito el decir *cuando una Provincia sea parte*, puesto que, podia serlo con individuo, sin que los Poderes Públicos se interesasen en esa causa.

El señor Zapata: Que quizá el resto de duda que abrigaba el señor Senador, nacia de la palabra *conflicto* de que hacia uso. Que un conflicto, que es la contestacion entre dos autoridades de una misma Provincia sobre saber á cual de ellas pertenece el conocimiento del asunto que motiva aquel, solo podia tener lugar entre los Poderes Públicos de la misma Provincia, es decir, entre Poderes que aunque independientes entre sí para el ejercicio de sus respectivas atribuciones forman, sin embargo, un solo todo, que es el Gobierno de que hacen parte; mientras que, la que se refiriese á los Poderes Públicos de diferentes Provincias, no seria en realidad un conflicto sino una cuestion, un pleito entre Provincias, una queja de una contra otra, en que cada una defenderia su soberania no delegada, comprometida en el Poder Pú-

blico en que habia tenido lugar el choque; cuestion: que en conformidad al artículo 106 de la Constitucion debe ser sometida á la decision de la Corte Suprema, y que como habia dicho ya, estaba comprendido en el proyecto entre los casos de la competencia originaria y exclusiva de aquella.

El señor *Arias* (Fernando) Que no habia llevado la cuestion á buscar la mayor propiedad de la palabra que habia usado; pero que ¿porqué no sería conveniente para hacer desaparecer toda duda, que se determinase por éste á otro artículo que la Corte Suprema conoce de esos pleitos, cuestiones ó como quiera llamarles, así como se consigna que decide las competencias entre las justicias de diferentes Provincias?

El señor *Arias* (Tomás) Que agregaría una sola observacion sobre las emitidas por el señor miembro informante, para satisfacer las dudas del señor Senador que acababa de hablar. Que el caso propuesto estaba comprendido, cuando entre los casos de la competencia de la justicia federal se enumera las causas que se susciten entre dos ó mas Provincias; y que, como éstas no podian ser representadas sino por uno de sus Poderes Públicos, por el Ejecutivo, resultaba, el hecho á que el honorable señor Senador preopinante aludia.

El señor *Ministro*: Pidió al Secretario leyese nuevamente el artículo y verificado esto dijo: Quisiera saber á que justicias de Provincias se refieren las últimas palabras del artículo.

El señor *Bustamante*: A las superiores.

El señor *Ministro*: En ese caso la cuestion de competencia entre las justicias superiores de dos Provincias vendria á ser una cuestion entre Provincia y Provincia. Los poderes públicos de Provincia no tiene representacion fuera de ella ni puede dárseles personería ante la Corte Suprema para gestionar á su nombre. La única excepcion de este principio absoluto, la ha establecido la Constitucion en los casos de conflicto entre los Poderes Públicos de una misma Provincia. Porque en este caso no habria quien dirimiese la contienda ni quien pudiese pretender la representacion exclusiva de la Provincia, entre los Poderes en pugna.

El señor *Zavalla*: El señor Ministro ha impugnado el último inciso del artículo en discusion, fundándose en que las competencias entre

las justicias de diferentes Provincias, vendrian á ser cuestiones de Provincia á Provincia, en las que solo deben tener personería sus Gobernadores, como que las representan fuera de su territorio y dentro del de la Confederacion: deduciendo de ahí, que dichas justicias no pueden elevar á la Corte Suprema sus competencias, para que las dirima. Pero no es así: hay muchas cuestiones de jurisdiccion, que se versan puramente sobre hechos ajenos á los derechos ó regalías de las Provincias, y que solo pueden interesar á los derechos particulares de los litigantes. Tales cuestiones no estan incluidas en el artículo 14 ya sancionado, que defiere á la misma corte la decision de las causas en que una Provincia sea parte; y de allí la necesidad de consignarse en el presente la resolucion de las que envuelvan una simple competencia de jurisdiccion. Si ella eliminase de una cuestion de límites del territorio por ejemplo, entónces, como principal, se ajitaría esta de preferencia, y desde luego la personería tocaría exclusivamente al Poder Ejecutivo provincial; y el fallo sobre dominio territorial dejaría resuelta la competencia como accesoria. Pero hay otros casos emanados de las convenciones particulares ó del proceso judicial, que afectan la jurisdiccion en casos dados, sin tocar á la soberanía de las Provincias. A ellos se refiere el artículo.

El señor *Ministro*—Las observaciones hechas por el señor Senador de Salta han venido á manifestarme que no solo es inútil la adiccion que el propone, sinó tambien que lo es el inciso que desea adicionar; y que aun será peligroso el dejarlo por que eso daría ante la justicia federal á las justicias de provincias, una personería que la Constitucion solo les concede en los casos de conflictos con otros poderes del mismo sistema, es decir de la misma provincia.

El señor *Zavalla*—Se insiste en que no hay casos de competencia entre las justicias de provincia, que no envuelvan las regalías provinciales; y esto me obliga á usar de la palabra, para mostrar alguno de esos casos. Tal será, señor, la competencia, que se originase de la cuestion sobre domicilio del reo. Sabido es, que el actor debe demandar ante el Juez de su localidad: si, pues, se disputase donde

reside este al tiempo de la demanda, se promovería una competencia entre las justicias de diferentes localidades ó provincias. Y en tal caso, ¿cómo pudiera decirse, que la soberanía provincial estaba interesada? ¿Cuál de sus regalías podría lastimarse por el fallo? Estas son las competencias, que llamé anteriormente nacidas puramente del proceso, y del todo ajenas al dominio de las provincias: de ellas, repito, no se ha hecho mencion hasta ahora en los artículos sancionados, y si no se tratara en el que se discute, quedaria un vacío sustancial en la ley. Como el caso que acabo de proponer, hay otros muchos que pueden derivarse de los contratos particulares, y que afectando sus intereses y derechos, bien pueden importar contiendas entre ellos; pero nunca pleitos entre las provincias, que requieran la intervencion de sus gobernadores, ó procuradores con todo el tren de gastos y tramitaciones consiguientes. Asi se perjudicaria á la pronta administracion de justicia; cuando las simples competencias, á que el artículo se refiere, se resolverian por la sola inspeccion de los autos en la Suprema Corte. Créolo, pues, conveniente y necesario.

El señor Ministro.—Las cuestiones que pueden suscitarse bajo el título de competencias son cuestiones de jurisdiccion, de soberanía provincial. Si alguna Cámara de justicia provincial usurpase el conocimiento de una causa, correspondiente á la Cámara de justicia de otra: la soberanía de esta provincia se encontraria invadida por un poder soberano de la otra: caso cuya decision corresponderia á la Corte Suprema por el tenor de la Constitucion, sin necesidad del artículo que se discute. Asi es que aunque estamos de acuerdo en que la Suprema Corte decida estas cuestiones, como de provincia á provincia, me opondré al artículo que só pretexto de establecer lo mismo, viene á dar á los poderes interiores de provincia, una importancia exterior que no les ha dado la Constitucion Nacional. Las cuestiones que pueden suscitarse entre las provincias; no solo pueden ser de interés territorial, sinó tambien cuestiones de jurisdiccion que es el caso de que hablamos y que procuraré esplayar en un ejemplo. Supongamos que la Suprema Corte de Justicia de Córdoba pretendiese juzgar en el caso de un delito cometido en la provincia

de Santiago, y que la Cámara de esta provincia pretendiese el derecho de juzgar conforme á la ley. En este caso decia, será la provincia de Santiago la que se estimaria ofendida por la de Córdoba y reclamaria la integridad de sus derechos ante la Suprema Corte de Justicia. Pero esto, repito, se haria sin necesidad del artículo que se discute, el cual, en vez de establecer esta legislacion va á crear un semillero de dificultades y competencias: no habra una sola legislatura ni una sola Cámara de Justicia de Provincia, que no se crea por este artículo con la personeria bastante para demandar ante la Suprema Corte ó Legislaturas ó Justicias de otras provincias por motivos verdaderos ó supuestos, pero siempre interminables.

El señor Zuvalia: Siento no hallarme de acuerdo con las opiniones del señor Ministro en la doctrina que se discute; y advierto, que con el ejemplo que acaba de aducir, me ha suministrado un nuevo argumento para fundar la que sostengo.

Ha supuesto el caso de un homicidio perpetrado en una Provincia; cuyo autor se encontrase domiciliado en otra; de aquí, añade; pudiera suscitarse una competencia de jurisdiccion, siempre que las leyes de ellas difiriesen en atribuir el juicio á la Provincia del domicilio, ó á la del delito.

Opina el señor Ministro que una tal disputa comprometeria los fueros de ellas y por consiguiente la Soberanía, y seria un caso de cuestion interprovincial. Además de que este ejemplo no destruye la existencia del que ántes aduce, viene tambien á aumentar el catálogo de los casos de simple competencia entre justicias de diferentes Provincias.

Sea cual fuese la jurisdiccion que prevaleciera en el caso propuesto, ya se atribuyese el conocimiento de la causa á la Provincia A, donde se cometió el homicidio, ó ya á la Provincia B, donde reside el reo, ella no menoscabaria la potestad judicial de ninguna de ellas: puesto que si en un caso dado favoreciera á la jurisdiccion de la una, en otro análogo favoreceria al fuero de la otra.

Si la jurisprudencia prefiriese al fuero del territorio donde se perpetró el crimen, siendo el de la Provincia de Córdoba; por ejemplo, quedaria su justicia triunfante en la competencia:

pero en otro caso, en que su vecina la de Santiago, fuese el teatro del delito, vencería esta, sin embargo de que el reo habitase en aquella. Semejantes cuestiones; pues, nunca pueden irrogar detrimento á las regalías de las Provincias, quedando por estos ejemplos establecido el principio de que tanto en lo civil como lo criminal, existen casos de pura competencia de jurisdiccion, nacidos de hechos aislados, que en nada afectan los derechos permanentes y esenciales de la Soberanía Provincial.

El señor Zapata: Que adhería por su parte á las opiniones expresadas por el señor Ministro respecto al punto en discusion; por que efectivamente, la justicia superior, como cualquier otro de los Poderes de una Provincia en el cho-que con la de otra, no formaría un caso de competencia, sinó una cuestion de Provincia á Provincia en que se interesaría la Soberanía de ambas, de donde resultaría que siempre, sería en ella *parte una* Provincia, y de la que, tanto por esta ley, como por la Constitucion, conocería originariamente la Corte Suprema.

Pasóse despues de esto á cuarto de intermedio.

Continuando la sesion en segunda hora, el señor Zapata expresó, que la mayoría de la Comision insistía en el artículo en discusion redactado en esta forma:

"Artículo 17—Corresponde á la misma Corte Suprema la decision de todas las competencias que se susciten, ya sea con su propia jurisdiccion ya entre las Cortes del distrito, ya entre estas y los Juzgados inferiores Federales con las justicias de Provincias, y entre las justicias superiores de diferentes Provincias."

El señor Presidente lo puso en discusion en esos términos.

Obtuvo la palabra el señor Ministro y dijo: Por el giro que ha llevado la discusion, en este artículo, creo ver en el espíritu del Senado una favorable disposicion á aceptarla con algunas reformas de las propuestas; no lleva fines la esperanza de alcanzar un cambio en la opinion del Senado; pero es de mi deber exponer en los términos más breves que me sea posible que la discusion me ha radicado en el concepto de que el artículo todo, es enteramente inútil y que por tanto no hacía falta en el Proyecto del Gobierno ni debería aceptarlo el Senado. Todos esos

casos que se llaman de competencia son puntos rejidos por la Constitucion y leyes Nacionales, que no necesitan una Legislacion especial. Estas competencias no las concibo segun la organizacion que estamos dando y que debe tener la Justicia Federal. Esta jamás puede proceder de oficio segun lo dejamos establecido en el artículo 7º de esta ley ni en otros casos que en los contenciosos que ocurran entre partes, segun el artículo 3º y aunque pueden ser parte individuos, corporaciones, Provincias y la Nacion misma (segun el artículo 9º) nunca serían parte las justicias mismas, ni se les concedería á ellas personería bastante para que reclamasen ante la Justicia Federal tales ni cuales prerrogativas.

Los únicos casos pues que pudieran aunque impropriamente llamarse de competencia serían más bien declinatorias de jurisdiccion. Voy á poner un caso para explicarme mejor, supongamos que por demanda interpuesta ante un Juez Federal de seccion, fuese emplazado un individuo para contestar, y que este individuo estimase corresponder á la Justicia de Provincia la resolucion de la demanda. En este caso pues, contestaría declinando de la Jurisdiccion del Juez, y formando una cuestion de prévia resolucion.

Si el Juez Federal se declaraba competente contra la ley había ocasion de apelar de esta sentencia ante la Corte de distrito. Esto se haría segun la doctrina ya establecida sin necesidad del artículo sobre competencia. No veo otros casos que merezcan este nombre, y como para éstos ya está legislado, insisto en la inutilidad del artículo en discusion.

El señor Delgado: Que no creía, como el señor Ministro, que el artículo fuese inútil en el proyecto, sinó que por el contrario le juzgaba indispensable y necesario, pues que por él se proveía á muchos casos de competencia de jurisdiccion que con harta frecuencia se habían de suscitar entre las Justicias Federales y entre estas y las de Provincia, sin que se interesase en nada la Soberanía Provincial para que por ese hecho, viniese á hacerse un caso de los que prevee la Constitucion como causas en que una Provincia es parte; y que, si para la decision de todos esos casos no se daba un Juez, los que sufrirían serían los interesados. Que esto

era lo que sucedía entre Estados, que no reconocían un superior para que decidiese de las competencias entre las justicias de uno y otro, y que por lo mismo, debía evitarse que entre las Provincias sucediese otro tanto. Que repetía pues, que si no se sancionaba el artículo, las cuestiones de competencia que se suscitaren, quedarían sin Juez, que las dirima; lo que, á na die podría ocultarse, cuanta confusion y trastornos produciría.

El señor Ministro: Como se está sancionando una ley que establece una gradacion en los Tribunales Federales, no existe el peligro manifestado por el señor Senador de Mendoza de que sobrevengan cuestiones que no tengan Juez que las dirima. Esos casos suceden solamente entre Naciones Soberanas que no reconocen superior, pero no entre las Soberanías de Provincia cuyas cuestiones ha sometido la Constitucion al más alto Tribunal de la Nacion. He dicho en otra vez que las cuestiones posibles entre los altos poderes Judiciales de la Provincia, se resolverían en cuestiones de Provincia á Provincia para lo que ya ha provisto la ley. Y que los casos que se han llamado de competencia entre los Tribunales inferiores vendrian á resolverse en casos comunes de apelacion ordinaria, para lo cual estamos proveyendo en la discusion de esta ley. Y finalmente que la única novedad que va á establecerse por este artículo con la palabra competencia, es el pernicioso sistema de dar accion y personería á los Juzgados para discutir intereses que no pertenecen á particulares, punto muy sustancial que debemos evitar con mucho esmero.

El señor Delgado: Que observaría solo que los casos que el señor Ministro expresaba, que podían resolverse por apelacion, no podían llamarse, casos de competencia; porque estos no los forman las partes, sino los Tribunales.

Sin más observaciones se votó el artículo en la última forma presentada por la mayoría de la Comision y resultó aprobado por mayoría de trece votos sobre cuatro.

Pasóse á la discusion del artículo 18, y no haciéndose observacion alguna sobre él, fué votado y aprobado por unanimidad.

Ygual resultado obtuvo el artículo 19.

Pasóse á la consideracion del Capítulo 3º “de

los Tribunales Inferiores Federales” y se leyó el artículo 20.

El señor Ministro propuso, que en lugar de que se dijese en el artículo, y los Juzgados subalternos de 1ª Instancia se pusiese simplemente y los Juzgados de Seccion etc.

Después de algunas esplicaciones á este respecto, fué aceptada la modificacion por la Comision y votado con ella el artículo resultó unánimemente aprobado, quedando en estos términos:

“Artículo 20—Son Tribunales inferiores Federales, las Cortes de distrito que establece esta ley en cada circunscripcion Judicial y los Juzgados de Seccion distribuidos en todo el Territorio de la Confederacion.”

Puesto en discusion el artículo 21 el señor Ministro expresó que estaba conforme con él, pero que no obstante quería muy ligeramente dar algunas de las razones, por que el Gobierno en su proyecto establecía cinco circunscripciones Judiciales dando la residencia de una de ellas en el Rosario. Que la principal era, el incremento que ha tomado, y toma cada dia esa Ciudad y que como era allí, donde la afluencia de extrangeros era más numerosa, era tambien allí, donde con más frecuencia se habian de suscitarse cuestiones nacidas de los tratados extrangeros que son uno de los casos de la competencia originaria y exclusiva de las Cortes de distrito, pero que, como creando cuatro circunscripciones, no se ataba las manos el Congreso para crear otra ú otras, si la experiencia manifestaba que las que se van á establecer por esta ley son insuficientes, no habia tenido inconveniente en aceptar la reduccion que la Comision habia hecho.

El señor Zapata: Que la Comision habia consultado los recursos de toda clase que tenía el país, y en vista de ellos habia reducido á solo cuatro las circunscripciones judiciales. Que por otra parte la razon que habia manifestado el señor Ministro respecto del Rosario, estaba consultada en el proyecto por la inmediacion de aquella Ciudad ó esta Capital donde debía tener su asiento la Corte del distrito del Este lo que hacia tambien que tuviesen los de aquella Ciudad, muy fácil acceso á la Corte Suprema. Que por el proyecto del Ejecutivo se daba á la Corte Suprema la atribucion de nombrar

Presidente para las de distritos de entre sus propios miembros, y que la Comisión había querido hacer de esa facultad una necesidad, sacando partido del número crecido de vocales de la Suprema, que la Constitución había creado, porque legisló para toda la República.

El señor Arias (Fernando) llamó la atención de la Honorable Cámara sobre si no sería más conveniente adscribir la Provincia de Santiago á la circunscripción del Norte en razón de que tomaba un Distrito Judicial con las otras tres Provincias que componen aquella, según el tratado entre ellos que hacia pocos días se había aprobado por el Senado.

El señor Zapata: Contestó, que la razón de adscribir la Provincia de Santiago á la circunscripción del centro, era que había mucho menos distancia de la Capital de dicha Provincia, á Córdoba (asiento de la Corte del distrito del centro) que á Salta.

Sin más observaciones, se votó el artículo, y fué unánimemente aprobado.

El artículo 22 no ofreciendo observación, se votó y fué aprobado por unanimidad.

Puesto en discusión el artículo 23.

El señor Delgado expuso, que correspondía, á su juicio expresar en él, que los Presidentes de estas Cortes, habían de ser de los miembros de la Suprema.

El señor Zapata: Que esa designación se hacía por el artículo 45 del proyecto.

Sin otra observación se votó y fué aprobado por unanimidad.

Puesto en discusión el artículo 24 el señor Zapata expresó, que por equivocación se había puesto en este artículo esta expresión *abogado recibido en la Confederación*, debiendo decirse simplemente, *abogado de la Confederación, etc.* Verificada la corrección se votó el artículo y fué aprobado por unanimidad.

Púsose en discusión el artículo 25.

El señor Zapata. Que como se veía, la Comisión había atribuido por este artículo á las Cortes de distrito, el conocimiento originario y exclusivo de las causas que versen sobre puntos regidos por los tratados con las naciones extranjeras; de las de almirantazgo, y jurisdicción marítima, y de los recursos de fuerza. Que designándose por la Constitución, en general, los casos de la jurisdicción de Justicia Federal,

y señalando expresamente aquellos que eran de la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema, se presentaba á la Comisión, la dificultad, de determinar de entre todos aquellos, (excluidos, los de competencia originaria de la Suprema Corte), cuales debían señalarse como de la jurisdicción y competencia originaria de las Cortes de distrito, y cuales de la de los demás Juzgados Federales. Que en el estudio muy detenido que sobre este delicado punto había hecho encontró que debía darse el conocimiento de aquellos tres casos á las Cortes de distrito, por la gravedad de su naturaleza y condición porque efectivamente, las cuestiones que se suscitasen nacidas de los tratados con las naciones extranjeras, en que podían comprometerse los derechos de la soberanía nacional, los recursos de fuerza, que son las apelaciones á los Tribunales superiores ó de alzas civiles de los actos y juicios de los Tribunales Eclesiásticos, cuando violan las formas ó disposiciones del derecho común, ó deciden sobre lo que no es de su competencia, y las causas de almirantazgo, que versan sobre puntos delicadísimos como son la legitimidad de las presas, y todos los pertenecientes á la jurisdicción marítima; y para cuya decisión, se requerían luces y reconocimientos especiales, no podían atribuirse, sino á los Tribunales más caracterizados después de la Corte Suprema, puesto que no era dado ya atribuirlos ó esta originariamente, desde que la Constitución, no los había señalado entre los casos de su competencia originaria y exclusiva. Que esos eran pues, los únicos casos que se había creído conveniente atribuir originariamente á las Cortes de distrito, dándoles el conocimiento en apelación de las causas de competencia originaria de los Juzgados Federales, y de los que fuesen regidas por la Constitución y leyes nacionales provenientes de los Tribunales Provinciales, que en estos últimos casos ejercen con la Justicia Federal una jurisdicción concurrente.

No haciéndose otra observación sobre el artículo se puso en votación, y fué unánimemente aprobado.

Puesto en discusión el artículo 26.

El señor Ministro, obtuvo la palabra y dijo: He pedido la palabra para solicitar en el artículo que acaba de leerse la supresión de las

siguientes líneas: *cuanlo las sentencias de estos no tengan recursos al Tribunal local Superior.* El art. leído niega pues el recurso inmediato á la Corte Federal de Distrito del procedimiento inconstitucional de un Juez inferior de Provincia, y esta disposición no solo anula la eficacia de los Tribunales inferiores Federales sinó tambien enerva la accion de la Soberania Nacional para la oportuna y pronta aplicacion de sus leyes.

Estamos, señores, organizando el Poder Judicial de la Confederacion porque sin el auxilio de este Poder seria completamente ilusoria la accion de los Poderes Legislativo y Ejecutivo que ya están en ejercicio. Es en vano tener leyes si la accion de ellas no ha de llegar con seguridad y prontitud á su debida aplicacion entre individuos particulares. Si este cuidado se hubiese deferido á las Justicias de Provincias se abria formado un cuerpo político monstruoso puesto que se habrian constituido dos poderes nacionales en la necesidad de mendigar la eficacia de su pensamiento y de su accion á un Poder, miembro de otro cuerpo é inferior en categoria, al establecer pues la Justicia Federal es nuestro deber subirla á la altura de los Poderes ya establecidos, darle todo el alcance posible para el cumplimiento de la Constitucion y leyes nacionales en todo el territorio de la Confederacion. Aunque esta Constitucion y leyes obligan á toda autoridad de Provincia segun el artículo 31 de nuestra Constitucion y debe suponerse que estas cumplirán fielmente con su deber, pero no es ese el punto de vista nuestro en la presente discusion: léjos de eso, es nuestro deber ponernos en el caso, de que suceda lo contrario y entónces es muy preciso que la Nacion tenga alli guardianes suyos, propios, centinelas alertas de la inviolabilidad de la Carta Constitucional, de las hermosas promesas que ella contiene y finalmente de las leyes que el Congreso Nacional hubiese dictado segundando aquellos propósitos. Es nuestro interés dar á la Justicia de la Nacion todos los elementos que constituyen su vida propia, su propia enerjia, virtud y fuerza para garantir sin concurso de ningun Poder extraño y mucho ménos inferior, el cumplimiento de la Constitucion y Leyes Nacionales confiadas á su celo. Nuestro interés está en que la influen-

cia legítima del Poder Judicial alcance bien á toda la Confederacion: en que esté cerca en todo caso de ataque inconstitucional de cualquiera autoridad: en que sea un remedio pronto á los males causados por el error, la ignorancia ó la malicia, en que los habitantes todos de la Confederacion tengan siempre á la vista la bandera Nacional, y fé en su amparo inmediato actual y efectivo contra toda injusticia que le arrebatara sus derechos y burle sus esperanzas en las promesas de la Constitucion. Y no solo contra las sentencias, como dice el artículo, sinó contra todo procedimiento que mereciere reparacion.

Todavía, señores, las Provincias no han asumido la fisionomia propia y especial que les dará su propio Gobierno conforme á nuestras actuales instituciones. Todavía no desean más que la seguridad de la paz y los derechos que les da la Constitucion: puede decirse que todavía no tienen más ley que esta ni más necesidad que las necesidades comunes, pero cuando su propio desarrollo crea intereses, sinó ribales, al menos, prescindentes de los intereses de la union, entónces señores será ménos adecuada la Justicia de Provincia para descuidar sobre puntos tan vitales á la Justicia Federal, ni para reemplazarlas sin peligro, para entónces estamos legislando señores! Sinó podemos pues negar á las Justicias de Provincia la iniciativa de los procesos en que evidentemente tienen interés legítimo de conocer, no retardemos tampoco la intervencion de la Justicia Nacional en los casos dignos de enmienda. Asi habremos conciliado todo.

Voy ahora á manifestar como el artículo propuesto anula las Cortes de distrito. Estas solo tienen jurisdiccion originaria en tres casos —causas nacidas de Tratados con naciones extranjeras —causas de almirantazgo y jurisdiccion marítima—recursos de fuerza. Si se tiene presente que de las cuatro Cortes de distrito, tres (á saber la de Córdoba, Mendoza y Salta), jamás tendrán ocasion de entender en causas de almirantazgo y jurisdiccion marítima: que en las causas nacidas de Tratados, es de suponer que por una que ocurra en esas Cortes ocurrirán 20 en la del litoral por estar en proporcion quizá la poblacion extranjera protegida por tratados: si esto se tiene presente, decia,

se verá que la jurisdicción originaria de estas Cortes queda reducido á tal cual proceso nacido de tratados y á los recursos de fuerza que son tan poco frecuentes. La jurisdicción de apelación de estas Cortes, está, según el proyecto, reducida á los casos en que la Confederación sea parte, y á los que tengan lugar entre vecinos de otras Provincias. Mientras tanto todos los demás casos regidos por la Constitución, todos los que se refieren á la propiedad y á la inviolabilidad del domicilio, á la libertad de la industria (toda en fin la declaración de derechos individuales) jamás obtendrán amparo en las Cortes de distrito y solo obtendrán de la Corte Suprema los muy escasos que se resignen á los largos trámites y dilaciones consiguientes. Si estos casos no pertenecen á las Cortes de distrito ¿á qué queda reducida su jurisdicción? se dirá que á las apelaciones que sean negadas por la ley de la Provincia á su Tribunal Superior. Entonces damos á las provincias el derecho de restringir ó ampliar á su voluntad la jurisdicción en apelación de las Cortes de distrito. Provincia podría haber que no negase apelación de sus jueces inferiores en ningún caso á su Cámara de Justicia y esta Provincia habría con esto solo anulado la jurisdicción en apelación de la Corte de distrito. Otras aumentarían más ó menos esta misma jurisdicción por un proceder contrario, y el resultado sería que una misma Corte de distrito no tendría una misma jurisdicción de apelación en las provincias mismas de su circunscripción. Esto es monstruoso. Sinó dejamos apelación á las Cortes de distrito de los procedimientos inconstitucionales de los Jueces inferiores de Provincia, estas Cortes harán un papel muy desairado. Pongamos un ejemplo para más claridad.

Si un individuo fuese arrojado en un calazo insalubre con peligro de su vida en una Provincia distante de esta Capital, por disposición de un Juez inferior, si en el proceso que al preso se le seguía, se había empleado el tormento ó cualquiera otro medio violento ó inconstitucional, si el paciente no había sido oído, si por fin había sido condenado á azotes... ¿qué haría en fin la víctima de estas violencias? apelaría á la Cámara de Justicia Provincial, y si esta no corregía los procedimientos del in-

ferior en todas sus partes, si uno solo quedaba impugne, como es posible, vendría la causa en apelación á la Corte Suprema, tal vez 600 leguas del teatro de los sufrimientos, y dejando en él á la Corte de distrito que ha visto con los brazos cruzados evolucionar este proceso, como otros muchos, escapando de su enmienda por la puerta de las Cámaras de Provincia y trayendo esta inmensa tarea á las funciones recargadas ya de la Suprema Corte.

Si esto se tiene presente, y meditamos que la Corte del litoral, mucho más recargada que las otras tres, tiene su asiento al lado de la Suprema Corte, nos acabaremos de persuadir que sería mucho mejor suprimir las Cortes de distrito dejando solo la Suprema.

Pero esto es contra la Constitución que habla del establecimiento de Tribunales inferiores: contra los recuerdos que hay en las provincias de las antiguas audiencias de Charcas y Buenos Aires, á donde las influencias personales y el favor en la Corte arrastraba procesos de las provincias para conorar su término con una injusticia. Esto también sería monstruoso.

Para conservar á las soberanías de Provincia todos sus derechos y prerogativas hasta la jurisdicción concurrente que esta ley les reserva conforme al artículo 31 de la Constitución: bastan las apelaciones, que les quedan también de los que busquen en la Justicia de Provincia la reparación de los males hechos por sus Jueces subalternos; pero, ¿cómo quitar á los habitantes de la Confederación el derecho de ampararse bajo su ley Suprema, en los casos que esta haya sido violada por esas Justicias que no son su hechura, aun que las ha admitido á su concurrencia? Concluyo pues pidiendo la supresión que indiqué al principio con lo que todo quedará concluido.

El señor Zavalía: Que debiendo ofrecer el artículo una seria y detenida discusión, y siendo ya la hora avanzada, proponía se levantase la sesión.

Siendo aceptada generalmente la indicación, se dió aquella por terminada levantando á las cuatro y media de la tarde.

Rúbrica del señor Presidente

Carlos M. Saravia
Secretario.